

**E**STAN volviendo a disparar contra el presidente de Estados Unidos. Esta vez, la amenaza a Ronald Reagan procede de Wall Street, no de las balas de un asesino. Paradójicamente, son los financie-

ros de la nación quienes, desde el mes de septiembre vienen disparando descargas mortales contra la Administración más conservadora que ha tenido Washington desde los tiempos de Herbert Hoover, hace medio siglo.

La política económica de Reagan se basa en el principio relativamente simple de que si se les da a los hombres de negocios todo lo que andan pidiendo continuamente, la economía prosperará. Fue lo que se intentó durante los años veinte de este siglo; pero el decenio terminó con el crac de 1929. El 28 de septiembre escapamos por muy poco de una catástrofe similar. La próxima vez, quizá no tengamos tanta suerte.

¿Qué pedían los hombres de negocios de Estados Unidos, cuando el presidente asumió el poder?

-Impuestos más bajos.

-Menos intervención gubernamental en los negocios de interés público.

-Disminución de los gastos nacionales en el sector del bienestar público.

-Aumento de las inversiones en contratos militares.

La Administración Reagan se ha dedicado diligentemente a satisfacer cada una de estas peticiones. En enero, cuando el presidente nombró su gabinete, pudo preverse el tipo de política que proyectaba llevar a cabo la nueva Administración. Designó como secretario del Interior, cuya función principal es proteger las tierras y los recursos naturales de la nación, a James A. Watt, en otro tiempo dedicado a presionar en favor de las sociedades que pretenden abrir los parques nacionales y las zonas costeras a las compañías privadas explotadoras de yacimientos minerales y de gas. Durante una Administración republicana anterior, fue vicepresidente de la Comisión Federal de la Energía, donde desempeñó un papel destacado al autorizar a las sociedades de servicios públicos triplicar el precio del gas natural. Su decisión más importante como secretario del interior fue abrir grandes zonas del pintoresco litoral de California a las compañías privadas para que efectúen prospecciones frente a la costa; y ante el Comité de Comercio del Senado dijo que tenía planes similares para el conjunto de los parques nacionales. Al mismo tiempo, mandó paralizar la acción judicial del Gobierno contra algunos de sus antiguos clientes, acusados de contaminar el ambiente.

Podemos encontrar ejemplos pare-



## WALL STREET DISPARA CONTRA REAGAN

THOMAS G. BUCHANAN

cidos de las nuevas prioridades en otras designaciones clave, como la de James Edwards al frente del Departamento de Energía, organismo cuyos 20.000 empleados tratan de mantener a raya a las gigantescas sociedades privadas que controlan los yacimientos petrolíferos y demás fuentes energéticas de la nación. Durante su campaña electoral, el presidente había prometido dismantlar este organismo, a fin de que las compañías petroleras gozasen de la «libertad» que necesitaban, según decían, para llevar a cabo sus operaciones sin intervención pública en su política o en sus precios. Sólo si aumentaban los beneficios, sostenía, tendrían el incentivo adecuado para abastecer al país de energía suficiente. La primera medida encaminada a dismantlar dicho organismo fue designar a un antiguo dentista y extremista de derechas para que lo dirigiese. Edwards había desempeñado el cargo de Gobernador de Carolina del Sur durante un período, en el curso del cual se había opuesto a todo intento de exigir a las centrales nucleares que tomasen medidas contra la contaminación, aduciendo que tales leyes «no son necesarias aquí, en Carolina del Sur, donde tenemos estupendas brisas que barren y dispersan las emanaciones». Cuando llegó a Washington dijo que esperaba que fuese suprimido pronto el organismo que él dirigía, e hizo cuanto pudo por acelerar tal proceso.

Una de sus primeras medidas fue recomendar una subvención estatal a cierta empresa privada de combustible nuclear en su propio Estado. Otra, elegir como consejero principal a un hombre que acababa de contratar al propio hijo de Edwards —joven que jamás había ejercido ningún trabajo— con objeto de que le ayudase a dirigir una compañía asesora que iba a fundar. A dicha compañía le concedió el Departamento de Energía un contrato de medio millón de dólares para que estudiase las actitudes del público respecto a la eliminación de residuos nucleares.

No sólo se han elegido administradores hostiles a los objetivos de los organismos que dirigen —proteger a los trabajadores frente a procesos industriales peligrosos, salvaguardar a los consumidores de los productos nocivos, evitar la contaminación del ambiente, o limitar la expansión del control de los monopolios en el mundo de los negocios— sino que el tan cacareado programa económico de «eliminar la burocracia innecesaria» se concentra en estos departamentos, cuyas medidas para proteger al público son acusadas de gravar los costos de producción y de disminuir así el incentivo de los beneficios.

Al tiempo que trata de suprimir 75.000 puestos de trabajo estatales, la Administración Reagan ha anunciado planes para reducir el gasto de asistencia social en un promedio de más

de 100.000 millones de dólares anuales durante los próximos cinco años, disminuyendo las asignaciones dedicadas al desempleo, ayudas a familias con ingresos inferiores, pensiones, becas de estudios y demás gastos «improductivos».

Por otra parte, se ha emprendido una enérgica campaña para convencer al ciudadano de la necesidad de la supremacía militar de Estados Unidos —no de una mera paridad con el bloque soviético—, a fin de justificar los extraordinarios gastos en armamento nuevo, considerados como inversión «productiva», creadora de puestos de trabajo y activadora de los negocios.

Sería difícil encontrar ejecutor más dócil de las medidas recomendadas en 1980 por la comunidad de las finanzas que la Administración que ganó las elecciones en noviembre pasado con el 28 por ciento de los votantes censados de Estados Unidos (el 24 por ciento votó a los dos oponentes de Reagan, y el 48 por ciento se abstuvo). Resulta irónico de todos modos que fuesen los propios ejecutivos y banqueros los primeros en rechazar el programa que su candidato no hace sino aplicar fielmente. Porque a medida que el año 1981 se acerca a su fin, los hombres con dinero para invertir en Estados Unidos no invierten porque no ven suficientes perspectivas de beneficios. Todos los indicios económicos van hacia abajo:

- la producción industrial aumentó durante unos meses al asumir Reagan el poder; pero desde entonces no ha dejado de descender;

- los índices de inflación y de desempleo se han ido acelerando;

- las industrias del automóvil y de la construcción se encuentran en situación de crisis;

- la Bolsa de Nueva York ha sufrido ya una pérdida de alrededor del 20 por ciento y expertos como Joe Granville (cuyos pronósticos precipitaron el pánico mundial del 28 de septiembre) creen que el descenso va a llegar al 50 por ciento.

- el mercado de valores a largo plazo se encuentra en peor situación aún que el de préstamos a corto plazo; pero los dos padecen unos tipos de interés sin precedentes.

El máximo exponente teórico de la política económica de Reagan es Milton Friedman, economista estadounidense que ganó el Premio Nobel por su extraordinario talento para construir gráficos que indican, mediante una manipulación hábil de las estadísticas, que si el programa de Reagan se acepta y se lleva a cabo, se reducirá la inflación, bajarán los tipos de interés, y se favorecerá el incremento de la economía. Como esto es precisamente lo contrario de lo que está sucediendo, el señor Friedman declara (*Newsweek*, 14 de septiembre): «Los elevados tipos de interés actuales re-

presentan un enigma para el cual, que yo sepa, no tenemos explicación satisfactoria». Culpa a «la miopía e instinto gregario de Wall Street», antes que a un defecto de la política económica que él ha estado preconizando. Los líderes del partido republicano, al igual que Howard Baker, líder de la mayoría del Senado, niegan que el Gobierno sea responsable de la actual recesión financiera. Baker culpa a los banqueros que ayudaron a elegir a Reagan. Dice que ahora «están votando al revés» —es decir, en contra del programa de economía de la Administración—, y habrá que hacerles ver que «están jugando a un juego muy peligroso». Robert Dole, presidente republicano del Comité de Finanzas del Senado, dice que «la comunidad financiera necesita un puntapié en el trasero».

Pero los hombres de negocios de la nación son comprensiblemente escépticos en cuanto al éxito de la política económica de Reagan. Teóricamente, se suponía que iba a comportar un aumento «temporal» de los tipos de interés, a fin de reducir el crédito disponible para las compras, y combatir así la inflación. Pero este aumento del costo de los préstamos supone un gasto adicional para la empresa que hace disminuir el incentivo para la inversión, y tiene al mismo tiempo un efecto catastrófico al reducir la venta de automóviles y de viviendas, cosas que, prácticamente, el consumidor nunca puede pagar en efectivo, ni para las que permitirse ya solicitar préstamos. Mientras no se elimine este obstáculo para una economía en expansión, los ingresos devengados de los impuestos serán insuficientes para equilibrar los presupuestos. El Gobierno proyecta reducir el tipo de impuestos durante los próximos tres años mediante un porcentaje acumulativo del 30 por ciento; pero sólo un aumento correspondiente en el volumen de ingresos privados imponibles procedentes de la actividad económica en expansión podría producir al Estado ingresos suficientes para evitar enormes déficits presupuestarios. Tales déficits tendrían que ser financiados mediante unos empréstitos estatales tan cuantiosos que la deuda pública ejercería una presión de alza sobre los tipos de interés, manteniéndolos en sus inusitados niveles actuales, o incluso más altos. Esto seguiría conteniendo la inversión y el consumo privados. El Gobierno de Estados Unidos tiene programado ya emitir un empréstito de 3.000 millones de dólares durante el último trimestre de 1981.

En la actualidad hay dos formas, esencialmente, de reducir el déficit presupuestario recortando la actividad financiera:

- La primera es aplicar impuestos más elevados a la venta de artículos de lujo, como defendió el economista John Kenneth Galbraith, y al mismo

tiempo limitar las proyectadas reducciones de impuestos que se pretenden aplicar a los grupos con ingresos más elevados, e introducir recortes sustanciales en los gastos militares nacionales.

- La segunda consiste en efectuar recortes más drásticos aún en los gastos de bienestar social de los que la Administración Reagan ha programado ya.

Poca duda cabe de que es la segunda solución la que la Administración Reagan tiende a elegir. Una forma de disfrazar la gravedad de tal medida sería «descentralizar» la seguridad social de la nación y demás programas de bienestar público, delegándolos en las autoridades locales y regionales, las cuales tendrían que soportar la peor parte de las protestas de los sectores más pobres de la población.

El fallido atentado perpetrado por W. Hinckley —hijo de un dirigente del petróleo y antiguo miembro del partido nazi norteamericano— le ha dado a Reagan una inmunidad casi mítica frente a la crítica pública setenta días después de haber asumido el poder. En el primer sondeo efectuado después de este atentado, sólo el 16 por ciento de la población se atrevió a manifestar su desaprobación respecto de Reagan. No obstante, esta inmunidad espúrea terminó el 19 de septiembre, cuando los sindicatos obreros de la nación organizaron una marcha sobre Washington, a cuya llamada respondieron 250.000 trabajadores de todo el país, para protestar contra el programa económico de Reagan. Las consecuencias de ese programa no empezarán a dejarse sentir hasta este invierno. Cuando esto sucede, la esporádica violencia de la juventud británica de este verano se reproducirá sin duda en las ciudades norteamericanas. La principal víctima de las medidas restrictivas de Reagan será el mismo sector de la población norteamericana que produjo las algaradas de finales del decenio de 1960: los jóvenes negros en paro. Es imposible predecir en este momento el resultado, una vez que el conflicto económico incida en el campo de la política interior.

Al mismo tiempo, los esfuerzos de la Administración Reagan por aplicar tipos elevados de interés para restringir el volumen monetario nacional y forzar de este modo a la reducción de los precios ha servido para crear una marejada de capital extranjero flotante, atraído y rechazado alternativamente por las fluctuaciones de los tipos de interés norteamericanos; marejada que ha sumergido con sus flujos y reflujos el sistema de control de divisas, ha provocado la revaluación de monedas europeas del 4 de octubre, y ha creado unas condiciones adversas para el comercio internacional de los meses venideros. ■ T. G. B. (Traducción de Fco. Torres Oliver).